No. 57670

United Nations (Office of the High Commissioner for Human Rights) and Colombia

Agreement between the Government of the Republic of Colombia and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the country office in Colombia. Bogotá, 25 January 2023 and 28 January 2023

Entry into force: 28 January 2023 by countersignature, in accordance with article XV(1)

Authentic text: Spanish

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 February 2023

No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat aux droits de l'homme) et

Colombie

Accord entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme relatif au bureau de pays en Colombie. Bogota, 25 janvier 2023 et 28 janvier 2023

Entrée en vigueur : 28 janvier 2023 par contreseing, conformément au paragraphe 1 de l'article XV

Texte authentique: espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 1er février 2023

^{*}Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA OFICINA EN COLOMBIA

El Gobierno de la República de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas, representada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en desarrollo de las obligaciones asumidas por los Estados al ratificar la Carta de las Naciones Unidas, especialmente las que se refieren al deber de promover el respeto universal a los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas y al compromiso que figura en su Artículo 56 de tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55 de la Carta;

Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en especial la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos;

Reconociendo la importancia de la observancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y considerando también subsiguientes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993); así como otras normas de derecho internacional relevantes para el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/141;

Reconociendo que el Gobierno de Colombia mantiene una política de cooperación y colaboración con los organismos e entidades internacionales de derechos humanos y que, a iniciativa del Gobierno de Colombia, y a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 23 de abril de 1996, el Alto Comisionado estableció en 1996 una oficina permanente en Colombia;

Considerando que el establecimiento de la Oficina se fundamenta en el mandato otorgado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/141 de 20 de diciembre de 1993;

Recordando las funciones que el "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo confió a la Oficina.

Reconociendo que el Gobierno de Colombia mantiene una política de cooperación y colaboración con los mecanismos internacionales de derechos humanos, y que en tal virtud, decidió cursar una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

Considerando que el 4 de abril de 2032 es el término previsto para la conclusión de las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz;

Registrando que, en consideración a desarrollos tales como la vinculación de Colombia a los principales instrumentos internacionales de derechos; el enfoque transversal de una cultura de respeto y promoción en materia de derechos humanos a través de estrategias, planes y programas; y la firma, el 24 de noviembre de 2016, del "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera", entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así como la celebración del presente instrumento, el Gobierno renueva su compromiso de mantener la presencia de la Oficina en el país.

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

ARTICULO I DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican a efectos del presente Acuerdo:

- a. Por "La Oficina del Alto Comisionado" (en adelante: la Oficina o OACNUDH) se entiende la oficina establecida en Bogotá D.C., por el Alto Comisionado;
- Por "los locales" se entiende las instalaciones físicas de la Oficina en Bogotá D.C. y otros locales auxiliares que sean utilizados por la Oficina para realizar sus actividades, de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo;
- c. Por "Gobierno" se entiende el Gobierno de la República de Colombia;
- d. Por "Estado anfitrión" se entiende la República de Colombia;
- e. Por "La Convención" se entiende la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946, de la cual la República de Colombia es parte desde el 6 de agosto de 1974;

- f. Por "Jefe o Jefa de la Oficina" se entiende el funcionario de las Naciones Unidas encargado de desarrollar y supervisar, en nombre y bajo la autoridad del Alto Comisionado, las actividades de la oficina, incluidas las cuestiones logísticas y administrativas necesarias, así como asegurar la coordinación de las actividades de la oficina con el Gobierno y con los representantes de los organismos internacionales competentes con presencia en Colombia;
- g. Por "Los funcionarios de las Naciones Unidas" se entiende los funcionarios de la Organización, empleados conforme al Estatuto y al Reglamento del Personal de la Organización de las Naciones Unidas, con excepción de las personas contratadas localmente y pagadas por hora, conforme a la resolución 76(1) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 7 de diciembre de 1946;
- h. Por "expertos en misión" se entiende aquellas personas distintas de los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas que dependen de lo establecido en el artículo VI de la Convención;
- i. Por "El personal de la Oficina" se entiende los funcionarios de las Naciones Unidas y los expertos en misión asignados a la Oficina;
- j. Por "El Personal local de la Oficina" se entiende las personas contratadas localmente y pagadas por hora.

ARTICULO II OBJETO Y ÁMBITO DEL ACUERDO

- 1. El objeto del presente Acuerdo es regular el estatus de la Oficina y su personal y facilitar las actividades de cooperación de la Oficina con el Gobierno.
- El presente Acuerdo establece las disposiciones necesarias para el desempeño eficaz de las funciones de la Oficina y para facilitar las actividades de cooperación con el Gobierno.

ARTICULO III APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN

La Convención será aplicable a la Oficina, su personal, expertos en misión, sus bienes, fondos y haberes.

ARTICULO IV

OBJETIVOS, CRITERIOS Y NORMAS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

- 1. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el mandato enunciado en la resolución 48/141 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, y el presente Acuerdo, la Oficina observará e informará sobre la situación de los derechos humanos con el fin de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos en Colombia. Las actividades de la Oficina, de conformidad con el articulo IV, párrafos 6 y 7 del Acuerdo, se centrarán en la cooperación con el Gobierno para contribuir a mejorar el respeto y la vigencia del derecho internacional de los derechos humanos y otras normas de derecho internacional relevantes para su mandato y la aplicación de las recomendaciones formuladas a Colombia por órganos y mecanismos de derechos humanos. Igualmente, la Oficina asesorará en materias de su competencia a los representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a individuos.
- 2. Las actividades de la Oficina estarán orientadas por los siguientes criterios:
 - Todas las actividades de la Oficina tendrán por objeto cumplir su mandato y lograr sus objetivos;
 - b. La Oficina, sujeta en todo momento a las disposiciones del presente Acuerdo, funcionará como un centro de gestión e interlocución, promoviendo un clima de confianza con todos los sectores que estén involucrados e interesados en la problemática de los derechos humanos y mantendrá un diálogo regular, contactos y relaciones de coordinación con el Gobierno y otras autoridades del Estado;
 - c. La Oficina actuará con discreción y se regirá, en sus relaciones con todos los sectores involucrados en las materias de su competencia, por los principios propios de las Naciones Unidas, tales como los de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.

ARTICULO V FUNCIONES DE LA OFICINA

- La Oficina, conforme a lo que prescribe su mandato, podrá ejercer las siguientes funciones bajo la autoridad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
 - a. Observar, dar seguimiento e informar sobre la situación de derechos humanos en Colombia, con el fin de llevar a cabo las funciones establecidas en el presente Acuerdo.
 - b. Brindar cooperación, asesoría y asistencia técnica a todas las ramas del poder público del Estado colombiano, incluidos los órganos de control, en la definición e implementación de normas y políticas de derechos humanos teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos relevantes.
 - Alentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas institucionales en materia de derechos humanos, incluido el impulso de la cooperación de Colombia con otros países,
 - d. Informar a las autoridades competentes sobre presuntas violaciones de derechos humanos, así como violaciones de otras normas de derecho internacional relevantes para el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los casos en que, a juicio de la Oficina, los procedimientos jurídicos internos aplicados por las autoridades nacionales competentes no sean compatibles con lo establecido en los instrumentos internacionales pertinentes. La Oficina podrá formular recomendaciones con miras a que se adopten medidas preventivas o correctivas cuando considere que lo requieren las circunstancias. Con este fin, la Oficina recibirá cualquier información que provenga de cualquier medio, sea este particular, privado, público u oficial sobre estos temas que pudiese encontrar relevante. La identidad de los autores de la información, víctimas y testigos será confidencial. Cuando a juicio de la Oficina las circunstancias así lo requieran, la Oficina compartirá esta información con las autoridades competentes con arreglo a las reglas, políticas y prácticas de las Naciones Unidas.

La Oficina también podrá recomendar y promover medidas de protección para los autores de la información que reciba, así como a las víctimas y los testigos en los hechos denunciados. La Oficina orientará a las personas que presenten información y

las alentará a que interpongan sus denuncias ante las autoridades competentes en el menor tiempo posible. En particular, la Oficina se abstendrá de emitir declaraciones concluyentes en las que se identifique a personas u organizaciones concretas como legalmente responsables de los hechos que se les imputan;

- e. Brindar asesoría y colaborar con organizaciones de la sociedad civil y sus representantes; así como con individuos para fortalecer sus capacidades en materia de promoción y protección de derechos humanos, incluyendo actividades de información y difusión sobre mecanismos internacionales de derechos humanos;
- f. Apoyar las acciones del Gobierno en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la promoción y protección de los derechos humanos, así como en programas de formación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, abogados y miembros del Poder Judicial;
- g. Dar seguimiento a las recomendaciones y las decisiones de los mecanismos internacionales de derechos humanos con miras a que sean debidamente consideradas por las autoridades respectivas y prestar asesoramiento a éstas en la adopción de medidas específicas para su aplicación;
- h. La Oficina mantendrá constante interlocución con todos los organismos competentes del Gobierno -civiles y militares- y del Estado, así como con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Cuando se trate de tomar contacto con personas privadas de libertad, la Oficina coordinará tales contactos con las autoridades competentes;
- i. Ejercer las siguientes funciones, previstas explícitamente en el "Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acogió con beneplácito mediante su resolución 2307 (2016):
 - Tomar todas las disposiciones para que en los informes anuales del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Humanos se incluya un capítulo especial sobre la implementación de los Acuerdos en materia de derechos humanos (Punto 6.3.4 del Acuerdo Final);

- Acompañar la implementación del capítulo 5 del Acuerdo sobre los derechos de las víctimas (Punto 6.4.2 del Acuerdo Final);
- Participar como invitada en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada del diseño y seguimiento de las acciones contra las organizaciones criminales (Punto 3.4.3 del Acuerdo Final);
- iv. Acompañar la implementación de los puntos relacionados con garantías de seguridad individuales y colectivas para miembros de las FARC-EP (Punto 6.4.2 del Acuerdo Final);
- Participar como invitada permanente en la Mesa Técnica encargada de Desarrollar y coordinar el plan estratégico de seguridad y protección para el nuevo movimiento o partido político de las FARC-EP (Punto 3.4.7.4.2 del Acuerdo Final);
- vi. Acompañar la revisión de la situación de los integrantes o colaboradores de las FARC-EP privados de la libertad (Punto 6.4.2 del Acuerdo Final);
- vii. Colaborar, en la verificación de la implementación y cumplimiento de las sanciones impuestas por el nuevo mecanismo transicional de justicia penal (Punto 5.1.2, párrafos 60 y 62 en relación con el párrafo 53(d) del Acuerdo Final).
- 2. La Oficina informará regularmente al Gobierno sobre sus preocupaciones y evaluaciones relacionadas con las materias que son objeto de su mandato, con el fin de propiciar un diálogo sobre las mismas y obtener observaciones al respecto. La Oficina podrá pronunciarse públicamente y cuando lo estime pertinente sobre cualquier asunto en el marco de su mandato.
- 3. La Oficina informará al Alto Comisionado de las actividades realizadas en el marco de su mandato y sus funciones, de las condiciones que las han favorecido u obstaculizado, de los compromisos de acción asumidos por el Gobierno y de las medidas en que aquellos se hayan plasmado, así como de las recomendaciones sobre acciones futuras.
- 4. El Alto Comisionado informará públicamente, de manera analítica y pormenorizada, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país, la implementación de los Acuerdos en materia de derechos humanos,

las actividades de la Oficina con arreglo a su mandato y el presente Acuerdo. Asimismo, formulará las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia. La información que recoja la Oficina será puesta a disposición de los distintos órganos establecidos en los tratados sobre derechos humanos de los cuales Colombia sea Parte, así como de los demás mecanismos y programas de derechos humanos de las Naciones Unidas, a los efectos del cumplimiento de sus respectivos mandatos.

- 5. Con estricto respeto a la independencia de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina facilitará, en el marco de sus competencias, las visitas que los Relatores Especiales, Expertos Independientes o Grupos de Trabajo realicen a Colombia para atender la invitación permanente cursada por el Gobierno a estos mecanismos.
- 6. La Oficina y el Gobierno establecerán planes y mecanismos de trabajo y coordinación que permitan, entre otros, dar seguimiento a las recomendaciones de la Oficina al Estado Colombiano e identificar necesidades de asesoría, cooperación y asistencia técnica de autoridades nacionales y territoriales específicas o en relación con asuntos y áreas estratégicas fijadas de común acuerdo.
- 7. El Gobierno podrá pronunciarse sobre los informes del Alto Comisionado de que trata el párrafo anterior, formulando las observaciones que estime pertinentes sobre su contenido y podrá pedir al Secretariado de las Naciones Unidas que se transmitan al Consejo de Derechos Humanos, con arreglo a sus regulaciones, sin perjuicio del derecho del Gobierno de dirigirse por sí mismo a dicho órgano cuando lo considere necesario.
- 8. El Gobierno hará todos los esfuerzos posibles por dar a conocer el mandato de la Oficina, así como sus declaraciones e informes, a todos sus funcionarios, con miras a promover la cooperación de las autoridades e instituciones del Estado y contribuir de manera efectiva al pleno cumplimiento del mandato de la Oficina.

ARTICULO VI PERSONALIDAD JURÍDICA

 La sede de la Oficina se establecerá en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, para llevar a cabo las funciones señaladas en el presente Acuerdo. La OACNUDH podrá establecer suboficinas en Colombia, con el acuerdo del Gobierno.

- La Oficina tendrá personalidad jurídica en la República de Colombia y contará con las capacidades necesarias para:
 - a. Contratar;
 - b. Adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles;
 - c. Entablar procesos legales;
- 3. Para el propósito de este Acuerdo, la Oficina estará representada por el Jefe o la Jefa de la Oficina.

ARTICULO VII

ESTATUTO Y COMPOSICIÓN DE LA OFICINA

- 1. La Oficina estará compuesta por profesionales internacionales y nacionales, así como de otro personal local que el Alto Comisionado designe y considere necesario para el pleno cumplimiento de su mandato. Su dirección correrá a cargo de una persona de reconocida competencia en la materia, designada por el Alto Comisionado como el representante de su oficina en el país, conforme a las reglas, procedimientos y políticas de la Oficina y de las Naciones Unidas. La Oficina informará al Gobierno sobre la composición de la Oficina, indicándose sus locales auxiliares, así como el número de funcionarios profesionales y funcionarios generales. De común acuerdo con el Gobierno, la Oficina podrá aumentar el número total de funcionarios profesionales internacionales.
- 2. La Oficina estará abierta al público.

La Oficina y su personal se abstendrán de toda actividad que sea incompatible con el carácter internacional y de imparcialidad de sus funciones, que sea contraria al espíritu del presente Acuerdo o a la legislación colombiana. El Jefe o la Jefa de la Oficina adoptará todas las disposiciones necesarias para asegurar el respeto de estas obligaciones. El Estado anfitrión se compromete a respetar el estatuto exclusivamente internacional de la Oficina.

3. La Oficina, sus eventuales locales auxiliares, sus bienes, fondos y haberes, gozarán de inmunidad, donde quiera que se encuentren y en poder de quien quiera que sea salvo en la medida en que, en un caso específico, la Organización de las Naciones Unidas haya renunciado a ella expresamente. Esta renuncia no podrá, sin embargo, extenderse a medidas de ejecución.

- a. Todos los locales utilizados por la Oficina serán inviolables. Los haberes y bienes de la Oficina y de sus locales auxiliares, donde quiera que se encuentren, y en poder de quien quiera que sea, gozarán de inmunidad contra allanamiento, requisición, confiscación y expropiación, así como contra toda otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
- b. Las autoridades locales competentes no penetrarán en los locales de la Oficina, salvo con el consentimiento expreso del Jefe o de la Jefa de la Oficina y en las condiciones con él acordadas.
- Los archivos de la Oficina y en general todos los documentos que le pertenezcan o se hallen en su posesión, serán inviolables donde quiera que se encuentren y en poder de quien quiera que sea.
- 5. La Oficina, así como sus bienes, ingresos y otros haberes estarán:
- a. Exentos de toda contribución directa y del impuesto sobre las ventas en los términos señalados en la sección 8 de la Convención; entendiéndose, sin embargo, que la Oficina no podrá reclamar exención alguna por concepto de contribuciones que, de hecho, constituyan una remuneración por servicios públicos.
- b. Exentos de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto de los artículos que importen o exporten para su uso oficial. Se entiende, sin embargo, que los artículos que se importen libres de derechos no se venderán en el territorio de Colombia, sino conforme a las condiciones que se acuerden con el Estado anfitrión.
- Exentos de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto de la importación y exportación de sus publicaciones.
- 6. La Oficina gozará de las facilidades de comunicación previstas en el artículo III de la Convención. Por consiguiente, la correspondencia oficial y todas las demás comunicaciones oficiales de la Oficina no podrán ser censuradas. Esta inmunidad abarcará los impresos, los datos fotográficos y electrónicos y otras formas de comunicación. La Oficina gozará del derecho de usar claves y despachar y recibir su correspondencia, ya sea por correo o valija sellada, los cuales serán inviolables y no podrán ser censurados. El personal de la Oficina gozará del derecho a comunicarse con su sede en Ginebra y entre

sus miembros en el terreno por radio, teléfono, telecopia, satélite o cualquier otro medio de comunicación.

ARTICULO VIII ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA

- El Jefe o la Jefa de Oficina gozará en el país de los privilegios e inmunidades previstos en las disposiciones de la Convención.
- Los funcionarios y funcionarias de las Naciones Unidas asignados a la Oficina gozarán de los privilegios e inmunidades previstos en los artículos V y VII de la Convención.
- Los expertos en misión de las Naciones Unidas gozarán de los privilegios e inmunidades previstos en el artículo VI de la Convención.
- 4. Tales privilegios e inmunidades se otorgan a los funcionarios en interés de las Naciones Unidas y no en provecho de los propios individuos. El Secretario General de las Naciones Unidas tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario en cualquier caso en que, según su propio criterio, la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda ser renunciada sin que se perjudiquen los intereses de las Naciones Unidas. La Oficina cooperará con las autoridades colombianas competentes para facilitar la administración adecuada de justicia, velar por el cumplimiento de las ordenanzas de policía y evitar que ocurran abusos en relación con tales privilegios, inmunidades y facilidades.

ARTICULO IX ENTRADA EN COLOMBIA, SALIDA DEL PAÍS Y CIRCULACIÓN EN EL INTERIOR DEL MISMO

- El personal y equipo de la Oficina podrán, con total libertad, entrar y salir de Colombia sin retraso ni obstáculo ocasionados a sus miembros, bienes, equipos, materiales, piezas de recambio y medios de transporte, de conformidad con la Convención.
- 2. El personal de la Oficina gozará de entera libertad de movimiento, sobre todo el territorio de Colombia. El Gobierno facilitará la libertad de movimiento en zonas de acceso restringido, en coordinación con las autoridades competentes. La libertad de movimiento comprenderá las siguientes prerrogativas, ejercidas de conformidad con el mandato de la Oficina:

- a. El acceso a todas las prisiones, centros de detención y lugares de interrogatorio. El personal de la Oficina tendrá la posibilidad de entrevistarse en privado con cualquier persona detenida o que se encuentre en esos lugares, de conformidad con lo establecido en el artículo V, párrafo 1 (a) y (h) del Acuerdo;
- El acceso a las autoridades centrales y locales de todos los sectores de la Administración, incluida la fuerza pública;
- c. Los contactos directos con particulares, representantes de sectores no gubernamentales, instituciones privadas, hospitales y centros médicos, así como los medios de comunicación;
- d. El acceso a todo material documental oficial necesario para el correcto desempeño de las actividades de la Oficina, excepto los que tengan carácter de secreto legal.

ARTICULO X BANDERAS, EMBLEMAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

La Oficina podrá enarbolar la bandera y/o los emblemas de las Naciones Unidas en sus locales, vehículos oficiales y de cualquier otra manera convenida por las Partes. Los vehículos de la Oficina exhibirán el emblema de las Naciones Unidas o un signo distintivo que se notificará al Estado anfitrión.

ARTICULO XI IDENTIFICACIÓN

- A solicitud del Jefe o de la Jefa de la Oficina, el Estado anfitrión otorgará al personal de la misma los documentos de identidad necesarios para certificar que, en su calidad de miembros del personal de la Oficina, gozan de privilegios e inmunidades, especialmente en lo que se refiere a la libertad de movimiento.
- Los miembros del personal de la Oficina deberán presentar, pero no entregar, sus documentos de identidad a todo funcionario gubernamental autorizado que así lo solicite.
- Cuando un miembro del personal de la Oficina cese en sus funciones o sea trasladado, la
 Oficina garantizará que sus documentos de identidad sean devueltos con prontitud al
 Estado anfitrión.

ARTICULO XII GARANTÍAS DEL ESTADO ANFITRIÓN

- El Estado anfitrión proporcionará a la Oficina y a su personal la seguridad necesaria en todo el territorio de Colombia, con miras al desempeño eficaz de sus actividades. Para ello, la Oficina informará con suficiente antelación a la entidad gubernamental que se designe al respecto, de todo desplazamiento que se proponga efectuar cuya naturaleza pueda comportar riesgo para la seguridad de su personal.
- El Estado anfitrión se compromete a respetar el estatuto de la Oficina y de su personal, así como a velar para que ninguna persona que tenga contactos con la Oficina sea de modo alguno objeto de abusos, amenazas, represalias o procesamiento por este único motivo.
- 3. En todos aquellos casos en que el presente Acuerdo se refiere a los privilegios, inmunidades y derechos de la Oficina y de su personal, así como a las facilidades que el Estado anfitrión se compromete a otorgar, el Estado anfitrión tendrá la responsabilidad de velar para que las autoridades locales competentes respeten estos privilegios, inmunidades y derechos y procuren las facilidades mencionadas.

ARTICULO XIII ARREGLO DE CONTROVERSIAS

Toda controversia entre las Partes que surja a causa del presente Acuerdo o en relación con él o de cualquier otro acuerdo suplementario, exceptuando las disputas sujetas a la Sección 30 de la Convención, y que no sea resuelta mediante negociación o cualquier otro medio de solución aceptado de común acuerdo, podrá ser sometido ante un Tribunal de tres árbitros a petición de cualquiera de las Partes. Cada una de las Partes nombrará un árbitro y los dos árbitros así nombrados designarán al tercero, quien actuará de presidente del Tribunal. Si dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud de arbitraje una de las Partes todavía no ha nombrado árbitro o si, dentro de los quince días siguientes al nombramiento de los dos árbitros, no se ha designado al tercer árbitro, cualquiera de las Partes podrá pedir al Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje que nombre un árbitro. El Tribunal establecerá el procedimiento arbitral, siempre y cuando establezca que serán suficientes dos árbitros para constituir quorum en cualquier asunto que se trate y que todas las decisiones requerirán el acuerdo de, al menos, dos de los árbitros. Los gastos incurridos por el Tribunal serán sufragados por las Partes conforme a lo establecido por el

Tribunal. El laudo arbitral contendrá una exposición de los motivos en que esté fundado y será final y vinculante para las Partes.

ARTICULO XIV ENLACE CON EL GOBIERNO

Con el fin de asegurar las comunicaciones con la Oficina para toda cuestión relacionada con las actividades de ésta, el Gobierno designa al Ministerio de Relaciones Exteriores como entidad de enlace, sin perjuicio de que la Oficina pueda contactar directamente con entidades del Estado para cuestiones puntuales con arreglo al artículo V, párrafo 1 del Acuerdo.

ARTICULO XV DISPOSICIONES FINALES

- El presente Acuerdo entrará en vigor desde la fecha de su firma. El Acuerdo se podrá modificar de común acuerdo mediante el intercambio de comunicaciones escritas en que las Partes expresen dicha intención.
- El presente Acuerdo reemplaza en su totalidad al Acuerdo firmado el 30 de octubre de 2019, el cual dejará de regir en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
- 3. El Gobierno reitera la vigencia de la Carta de fecha 29 de noviembre de 1996, suscrita en simultáneo con el Acuerdo firmado el 29 de noviembre de 1996, que versa sobre facilitación del local para la sede de la Oficina en Colombia.
- 4. En atención a las consideraciones de su preámbulo y a la luz de las funciones de la Oficina, el presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta el 4 de abril de 2032. Las Partes podrán prorrogar su vigencia mediante el canje de comunicaciones escritas en las que se exprese la voluntad al efecto.
- 5. Durante la vigencia del Acuerdo, cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante comunicación por escrito a la otra Parte. El Acuerdo permanecerá en vigor por un período de seis meses a partir de la recepción de la comunicación de la denuncia por alguna de las partes a fin de facilitar la conclusión y el cese de las actividades de la Oficina en el país. Las obligaciones asumidas por el Gobierno subsistirán tras la terminación del presente Acuerdo en la medida necesaria para permitir el retiro ordenado de los bienes,

fondos y haberes de la Oficina en el país y la solución de cualquier controversia pendiente de conformidad con el artículo XIII del presente Acuerdo.

Hecho en dos ejemplares en español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia

El Ministro de Relaciones Exteriores

Por la Organización de las Naciones

Unidas

El Alto Comisionado para los Derechos

Humanos

VOLKER TÜRK

[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS ON THE COUNTRY OFFICE IN COLOMBIA

The Government of the Republic of Colombia and the United Nations, represented by the High Commissioner for Human Rights, in accordance with the obligations undertaken by States in ratifying the Charter of the United Nations, particularly those concerning the duty to promote universal respect for human rights and fundamental freedoms for all and the pledge contained in Article 56 to take joint and separate action in cooperation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55 of the Charter,

Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations, in particular international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights,

Recognizing the importance of observance of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and considering also subsequent international human rights instruments, such as the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights (1993), as well as other rules of international law relevant to the mandate of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, established by the General Assembly of the United Nations in its resolution 48/141,

Recognizing that the Government of Colombia maintains a policy of cooperation and collaboration with international human rights organizations and agencies and that, at the initiative of the Government of Colombia and at the request of the United Nations Commission on Human Rights, the High Commissioner established a permanent office in Colombia on 23 April 1996,

Whereas the establishment of the country office was based on the mandate vested in the United Nations High Commissioner for Human Rights by the General Assembly of the United Nations in its resolution 48/141 of 20 December 1993,

Recalling the functions that the "Final Agreement for Ending the Conflict and Building a Stable and Lasting Peace", signed in 2016 between the Government of Colombia and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Revolutionary Armed Forces of Colombia – People's Army) entrusted to the country office,

Recognizing that the Government of Colombia maintains a policy of cooperation and collaboration with international human rights mechanisms and that, accordingly, it decided to extend a standing invitation to the special procedures of the United Nations Human Rights Council,

Mindful that 4 April 2032 is the date established for the termination of the functions of the Special Jurisdiction for Peace,

Noting that, with developments such as the accession of Colombia to the main international human rights instruments; the cross-cutting approach taken to fostering a culture in which human rights are respected and promoted, through strategies, plans and programmes; the signing, on 24 November 2016, of the "Final Agreement for Ending the Conflict and Building a Stable and Lasting Peace" between the Government of Colombia and FARC-EP; and the conclusion of this instrument, the Government has renewed its commitment to the continued presence of the country office in Colombia,

Have agreed as follows:

Article I. Definitions

For the purposes of this Agreement:

- a. "Country office of the High Commissioner" (hereinafter "country office" or COUNHCHR) means the office opened in Bogotá, D.C. by the High Commissioner;
- b. "Premises" means the physical premises of the country office in Bogotá, D.C. and other locations used by the country office to conduct its activities in accordance with the provisions of this Agreement;
 - c. "Government" means the Government of the Republic of Colombia;
 - d. "Host State" means the Republic of Colombia;
- e. "The Convention" means the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946, to which the Republic of Colombia acceded on 6 August 1974;
- f. "The head of the country office" means the United Nations official responsible for conducting and overseeing, on behalf of and under the authority of the High Commissioner, the activities of the country office, including the necessary logistical and administrative arrangements, and for ensuring coordination of the activities of the country office with the Government and the representatives of the competent international agencies present in Colombia;
- g. "Officials of the United Nations" means the staff members of the United Nations, employed under the Staff Regulations and Staff Rules of the United Nations, with the exception of persons who are recruited locally and are assigned to hourly rates in accordance with resolution 76 (1), of 7 December 1946, of the General Assembly of the United Nations;

- h. "Experts on mission" means individuals other than officials of the United Nations coming within the scope of article VI of the Convention;
 - i. "Staff of the country office" means officials of the United Nations and experts on mission assigned to the country office;
 - j. "Local staff of the country office" means persons recruited locally and assigned to hourly rates.

Article II. Purpose and scope of the Agreement

- 1. The purpose of this Agreement is to regulate the status of the country office and its staff and to facilitate the country office's cooperation with the Government.
- 2. This Agreement establishes the provisions necessary for the effective performance of the functions of the country office and to facilitate cooperation activities with the Government.

Article III. Application of the Convention

The Convention shall apply to the country office, its staff, experts on mission, property, funds and assets.

Article IV. Objectives, rules and general norms for the functioning of the country office

- 1. In accordance with the Charter of the United Nations and the mandate set forth in General Assembly resolution 48/141, of 20 December 1993, and this Agreement, the country office shall observe and report on the human rights situation in order to advise the Colombian authorities on the formulation and implementation of policies, programmes and measures to promote and protect human rights in Colombia. In accordance with article IV, paragraphs 6 and 7, of the Agreement, the activities of the country office shall be focused on cooperation with the Government to help to enhance the respect for and enforcement of international human rights law and other norms of international law relevant to the mandate of the country office and promote the implementation of recommendations made to Colombia by human rights bodies and mechanisms. The country office shall also advise representatives of civil society, human rights non-governmental organizations and individuals on matters within its competence.
 - 2. The activities of the country office shall be guided by the following rules:
 - a. All activities of the country office shall be aimed at fulfilling its mandate and achieving its objectives;
- b. The country office, subject at all times to the provisions of this Agreement, shall function as a centre for management and dialogue, promoting a climate of trust in respect of all sectors involved in and concerned by human rights issues and shall maintain a regular dialogue, contacts and relations for coordination with the Government and other State authorities;
- c. The country office shall act with discretion and, in its relations with all sectors involved in matters within its competence, be guided by the principles of the United Nations, such as impartiality, independence, objectivity and transparency.

Article V. Functions of the country office

- 1. The country office, in accordance with its mandate, may carry out the following functions under the authority of the United Nations High Commissioner for Human Rights:
- a. Observe, monitor and report on the human rights situation in Colombia in order to carry out the functions established in this Agreement;
- b. Provide cooperation, advice and technical assistance to all branches of government, including the supervisory bodies, concerning the elaboration and implementation of human rights rules and policies, taking into account the recommendations made by the relevant international human rights mechanisms;
- c. Encourage the exchange of experiences and good institutional practices in the area of human rights, including the promotion of cooperation between Colombia and other countries;
- d. Inform the competent authorities of suspected violations of human rights and violations of other norms of international law relevant to the mandate of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in cases where, in the opinion of the country office, the domestic legal procedures followed by the competent national authorities are not consistent with the relevant international instruments. The country office may recommend that preventive or corrective measures be adopted, when it deems that the circumstances so require. To that end, the country office shall receive all information provided by any source, be it individual, private, public or official, on matters that it might consider relevant. The identity of the sources of information, victims and witnesses shall be kept confidential. When the country office deems that the circumstances so require, it shall share this information with the competent authorities in accordance with the rules, policies and practices of the United Nations.

The country office may also recommend and promote measures to protect the sources of the information it receives and the victims and witnesses of the reported incidents. The country office shall provide guidance to persons who come forward with information and encourage them to file complaints with the appropriate authorities as quickly as possible. In particular, the country

office shall refrain from issuing definitive statements identifying specific individuals or organizations as being legally responsible for acts that they are alleged to have committed;

- e. Advise and work with civil society organizations and their representatives, as well as with individuals, to strengthen their capacities related to the promotion and protection of human rights, including through information and outreach activities concerning the international human rights mechanisms;
- f. Support actions taken by the Government to build institutional capacities in the promotion and protection of human rights and in training programmes for law enforcement officials, lawyers and members of the judiciary;
- g. Follow up on the recommendations and decisions of international human rights mechanisms to ensure they are given due consideration by the respective authorities, and advise them on the adoption of specific measures for the application thereof;
- h. The country office shall be in constant communication with all relevant government entities both civilian and military and the State, and with civil society organizations dedicated to promoting and defending human rights. When arranging to communicate with detained persons, the country office shall act in coordination with the competent authorities;
- i. Exercise the following functions, which are explicitly provided for in the "Final Agreement for Ending the Conflict and Building a Stable and Lasting Peace", signed by the Government of Colombia and FARC-EP on 24 November 2016, which the United Nations Security Council welcomed in its resolution 2307 (2016):
- i. Take all necessary measures to ensure that annual reports submitted by the High Commissioner to the Human Rights Council include a special chapter concerning the implementation of the human rights accords (section 6.3.4 of the Final Agreement);
- ii. Support the implementation of item 5 of the Agreement, concerning the rights of victims (section 6.4.2 of the Final Agreement);
- iii. Participate as a guest in the National Commission on Security Guarantees, which is responsible for developing and monitoring actions to combat criminal organizations (section 3.4.3 of the Final Agreement);
- iv. Support the implementation of the parts of the Agreement concerning individual and collective security guarantees for members of FARC-EP (section 6.4.2 of the Final Agreement);
- v. Participate, as a permanent invited member, in the technical committee responsible for developing and coordinating a strategic plan on security and protection for the new FARC-EP political party or movement (section 3.4.7.4.2 of the Final Agreement);
 - vi. Support the review of the situation of detained FARC-EP members or collaborators (section 6.4.2 of the Final Agreement);
- vii. Collaborate in the verification of the application of and compliance with the sanctions imposed under the new transitional criminal justice mechanism (section 5.1.2, paragraphs 60 and 62, in relation to paragraph 53 (d) of the Final Agreement).
- 2. The country office shall regularly inform the Government of its concerns and assessments related to the matters within its mandate, with a view to fostering a dialogue and receiving comments on them. The country office may make public statements when it deems appropriate on any matter under its mandate.
- 3. The country office shall report exclusively to the High Commissioner on the activities carried out within the framework of its mandate and functions, the conditions that have facilitated or hindered those activities, the commitments for action made by the Government and practical steps that have been taken to implement them, and recommendations for future action.
- 4. The High Commissioner shall provide detailed analytical public reports on the human rights situation in the country, the implementation of the human rights accords and the activities of the country office to the Human Rights Council of the United Nations, in accordance with its mandate and this Agreement. The High Commissioner shall also make such observations and recommendations as he or she deems appropriate, with a view to strengthening the promotion and protection of human rights in Colombia. The information collected by the country office shall be made available to the various bodies established under the human rights treaties to which Colombia is a party and to other United Nations human rights mechanisms and programmes, for the purposes of the fulfilment of their respective mandates.
- 5. Strictly respecting the independence of the special procedures of the Human Rights Council, the country office shall facilitate, within its authority, the visits that special rapporteurs, independent experts or working groups make to Colombia pursuant to the standing invitation extended by the Government to these mechanisms.
- 6. The country office and the Government shall establish working and coordination plans and mechanisms to ensure, inter alia, follow up on recommendations made by the country office to the Government of Colombia and the identification of the needs of national and regional authorities related to advice, cooperation and technical assistance or to mutually agreed upon strategic matters.
- 7. The Government may express its views on the reports of the High Commissioner referred to in the preceding paragraph, making such observations on their contents as it deems appropriate, and may request the Secretariat of the United Nations to transmit its observations to the Human Rights Council, in accordance with its regulations, without prejudice to the right of the Government to contact the Council directly when it considers it necessary.
- 8. The Government shall make every effort to inform all its officials of the mandate of the country office, as well as of its statements and reports, with a view to promoting the cooperation of State authorities and institutions and contributing effectively to the full implementation of the mandate of the country office.

Article VI. Legal personality

- 1. The headquarters of the country office shall be in the city of Bogotá D.C., Republic of Colombia, to carry out the functions set forth in this Agreement. COUNHCHR may establish sub-offices in Colombia with the agreement of the Government.
 - 2. The country office shall have legal personality in the Republic of Colombia and shall have the necessary powers to:
 - a. Enter into contracts;
 - b. Acquire and dispose of movable and immovable property;
 - c. Initiate legal action.
 - 3. For the purposes of this Agreement, the country office shall be represented by the head of the country office.

Article VII. Status and composition of the country office

- 1. The country office shall comprise international and national professionals, as well as local staff that the High Commissioner appoints and considers necessary for the full implementation of his or her mandate. It shall be managed by a person of recognized competence in the field, appointed by the High Commissioner as the representative of the country office in accordance with the rules, procedures and policies of the country office and the United Nations. The country office shall inform the Government of the composition of the country office, indicating its other locations and the number of professional and general staff. With the agreement of the Government, the country office may increase the total number of its international professional staff.
 - 2. The country office shall be open to the public.

The country office and its staff shall refrain from any activity incompatible with the international and impartial nature of their functions or contrary to the spirit of this Agreement or Colombian laws. The head of the country office shall take all necessary measures to ensure compliance with these obligations. The host State shall undertake to respect the exclusively international status of the country office.

- 3. The country office and other locations, their property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity, except insofar as in any particular case the United Nations has expressly waived such immunity. The waiver of immunity may not, however, extend to measures of execution.
- a. All premises used by the country office shall be inviolable. The assets and property of the country office and its auxiliary premises, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.
- b. The competent local authorities shall not enter the premises of the country office, except with the express consent of the head of the country office and under conditions agreed to by him or her.
- 4. The archives of the country office, and in general all documents belonging to it or held by it, shall be inviolable, wherever located and by whomsoever held.
 - 5. The country office, its assets, income and other property shall be:
- a. Exempt from all direct taxes and sales taxes as provided in section 8 of the Convention. It is understood, however, that the country office may not claim any exemption in respect of taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services.
- b. Exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported for its official use. It is understood, however, that articles imported under such exemption will not be sold in the territory of Colombia except under conditions agreed with the host State.
 - c. Exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of its publications.
- 6. The country office shall enjoy the facilities in respect of communication provided for in article III of the Convention. Accordingly, no censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the country office. Such immunity shall extend to printed matter, photographic and electronic data and other forms of communication. The country office shall have the right to use codes and to dispatch and receive its correspondence, either by courier or in sealed pouches, all of which shall be inviolable and not subject to censorship. The staff of the country office shall be entitled to communicate with their headquarters in Geneva and with staff members in the field by radio, telephone, fax, satellite or any other means of communication.

Article VIII. Status of the staff of the country office

- 1. The head of the country office shall enjoy in the country the privileges and immunities provided for in the Convention.
- 2. Officials of the United Nations assigned to the country office shall enjoy the privileges and immunities provided for in articles V and VII of the Convention.
 - 3. United Nations experts on mission shall enjoy the privileges and immunities provided for in article VI of the Convention.
- 4. Such privileges and immunities are granted to officials in the interests of the United Nations and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary-General of the United Nations shall have the right and the duty to waive the immunity of

any official in any case where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the United Nations. The country office shall cooperate with the competent Colombian authorities to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with those privileges, immunities and facilities.

Article IX. Entry into and exit from Colombia, and movement within the country

- 1. The staff and officials of the country office shall enjoy unrestricted freedom of entry into and exit from Colombia, without delay or hindrance, of its members, property, supplies, equipment, spare parts or means of transport, in accordance with the Convention.
- 2. The staff of the country office shall enjoy unrestricted freedom of movement throughout the territory of Colombia. The Government shall facilitate freedom of movement in restricted areas, in coordination with the competent authorities. Freedom of movement shall comprise the following prerogatives, to be exercised in accordance with the mandate of the country office:
- a. Access to all prisons, detention centres and places of interrogation. The staff of the country office shall have the possibility of speaking in private with any person detained or present in such places, in accordance with article V, paragraph 1 (a) and (h), of the Agreement;
 - b. Access to central and local authorities in all branches of government, including law enforcement agencies;
- c. Direct contact with private individuals, representatives of non-governmental organizations, private institutions, hospitals and medical centres and the media:
- d. Access to all official documentary material necessary for the proper conduct of the activities of the country office, except those that are subject to legal secrecy.

Article X. Flags, emblems and distinctive signs

The country office may display the flag and/or emblems of the United Nations on its premises, official vehicles and in any other manner agreed upon by the Parties. The vehicles of the country office shall display the United Nations emblem, or a distinctive sign of which the host State shall be notified.

Article XI. Identification

- 1. The host State shall, at the request of the head of the country office, issue to the staff of the country office the necessary identity documents stating that, as members of the staff of the country office, they enjoy privileges and immunities, in particular with regard to freedom of movement.
- 2. At the request of an authorized government official, members of the staff of the country office shall produce, but not surrender, their identity documents.
- 3. The country office shall, upon termination of employment or reassignment of any member of its staff, ensure that all identity documents are returned promptly to the host State.

Article XII. Guarantees of the host State

- 1. The host State shall afford the country office and its staff the necessary security throughout Colombia for the effective conduct of its activities. To this end, the country office shall notify the designated government authority in good time of any proposed travel arrangements which might entail a risk to the safety of its staff.
- 2. The host State undertakes to respect the status of the country office and its staff and to ensure that no person who has had contact with the country office is subjected to abuse, threats, reprisals or proceedings on those grounds alone.
- 3. Wherever this Agreement refers to the privileges, immunities and rights of the country office and its staff and to the facilities the host State undertakes to provide, the host State shall have the responsibility of ensuring that the competent local authorities respect those privileges, immunities and rights and provide the facilities in question.

Article XIII. Settlement of disputes

Any dispute between the Parties arising out of or in connection with this Agreement or any supplementary agreement, other than disputes subject to section 30 of the Convention, which is not settled through negotiation or any other mutually agreed means of resolution may be submitted to a tribunal of three arbitrators, at the request of either Party. Each Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall serve as the Chair of the tribunal. If within 30 days of the request for arbitration either Party has not appointed an arbitrator, or if within 15 days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator

has not been appointed, either Party may request the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration to appoint an arbitrator. The tribunal shall establish the procedures for the arbitration, provided that it establishes that two arbitrators shall be sufficient to constitute a quorum on any matter and that all decisions shall require the agreement of at least two of the arbitrators. The expenses incurred by the tribunal shall be borne by the Parties as determined by the tribunal. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based and shall be final and binding upon the Parties.

Article XIV. Liaison with the Government

The Government shall designate the Ministry of Foreign Affairs as the liaison entity for communication with the country office on all matters related to the activities of that country office, without prejudice to the possibility of the country office contacting State entities directly in relation to specific matters, in accordance with article V, paragraph 1, of this Agreement.

Article XV. Final provisions

- 1. This Agreement shall enter into force on the date of its signature. The Agreement may be amended by mutual agreement through the exchange of written communications in which the Parties express such an intention.
- 2. This Agreement replaces in its entirety the Agreement signed on 30 October 2019, which shall cease to be in force on the date of the entry into force of this Agreement.
- 3. The Government reiterates that the letter dated 29 November 1996, signed at the same time as the Agreement signed on 29 November 1996, concerning the provision of the premises for the headquarters of the country office in Colombia, remains in force.
- 4. In the light of the considerations contained in its preamble and of the functions of the country office, this Agreement shall remain in force until 4 April 2032. The Parties may extend its validity by exchanging written communications expressing their wish to do so.
- 5. While this Agreement is in force, either Party may terminate it by means of a written communication to the other Party. The Agreement shall remain in force for a period of six months from the receipt of the notice of termination by either of the Parties to facilitate the completion and cessation of the activities of the country office in Colombia. The obligations assumed by the Government shall subsist subsequent to the termination of this Agreement to the extent necessary to permit the orderly withdrawal of the property, funds and assets of the country office and the settlement of any pending dispute pursuant to article XIII of this Agreement.

DONE in two copies in Spanish, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Colombia:
ÁLVARO LEIVA DURÁN
Minister for Foreign Affairs
Date 28 January 2023
Place Bogotá

For the United Nations:

VOLKER TÜRK

High Commissioner for Human Rights

Date 25 January 2023

Place Bogotá

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Accord entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme relatif au bureau de pays en Colombie

Le Gouvernement de la République de Colombie et l'Organisation des Nations Unies, représentée par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, conformément aux obligations contractées par les États en ratifiant la Charte des Nations Unies, notamment celles qui concernent le devoir de promouvoir le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous et l'engagement énoncé à l'article 56 de la Charte, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, d'agir conjointement et séparément en coopération avec l'Organisation,

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, en particulier la coopération internationale visant à promouvoir et à encourager le respect des droits de l'homme,

Reconnaissant l'importance du respect des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et considérant également les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui ont suivi, tels que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (1993), ainsi que d'autres règles du droit international pertinentes pour le mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, créé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 48/141,

Reconnaissant que le Gouvernement colombien mène une politique de coopération et de collaboration avec les organisations et agences internationales de défense des droits de l'homme et que, à l'initiative du Gouvernement colombien et à la demande de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, le Haut-Commissaire a établi un bureau permanent en Colombie le 23 avril 1996,

Considérant que le bureau de pays a été créé dans le cadre du mandat conféré au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993,

Rappelant les fonctions confiées au bureau de pays en vertu de l'« Accord final pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable », signé en 2016 entre le Gouvernement colombien et les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée populaire),

Reconnaissant que le Gouvernement colombien mène une politique de coopération et de collaboration avec les mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme et qu'en conséquence, il a décidé d'adresser une invitation permanente aux procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies,

Conscients que le 4 avril 2032 est la date fixée pour la cessation des fonctions de la Juridiction spéciale pour la paix,

Compte tenu de faits nouveaux tels que l'adhésion de la Colombie aux principaux instruments internationaux des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme; l'approche transversale adoptée pour mettre en œuvre une culture au sein de laquelle les droits de l'homme sont respectés et promus, au moyen de stratégies, de plans et de programmes; la signature, le 24 novembre 2016, de l'« Accord final pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable » entre le Gouvernement colombien et les FARC-EP; et la conclusion de cet instrument, le Gouvernement a renouvelé son engagement en faveur du maintien du bureau de pays en Colombie,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par :

- a. « bureau de pays du Haut-Commissaire » (ci-après dénommé « bureau de pays ») le bureau ouvert à Bogota par le Haut-Commissaire ou la Haute-Commissaire ;
- b. « locaux » les locaux du bureau de pays à Bogota et les autres lieux utilisés par le bureau de pays pour mener ses activités conformément aux dispositions du présent Accord ;
- c. « Gouvernement » le Gouvernement de la République de Colombie ;
- d. « État hôte » la République de Colombie ;
- e. « la Convention » la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, à laquelle la République de Colombie a adhéré le 6 août 1974 ;
- f. « directeur ou la directrice du bureau de pays » le ou la fonctionnaire des Nations Unies chargé(e) de mener et de superviser, au nom et sous l'autorité du Haut-Commissaire ou de la Haute-Commissaire,

les activités du bureau de pays, y compris les dispositions logistiques et administratives nécessaires, et d'assurer la coordination des activités du bureau de pays avec le Gouvernement et les représentants des organismes internationaux compétents présents en Colombie ;

g. « fonctionnaires des Nations Unies » les membres du personnel des Nations Unies, employés en vertu du Statut et Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, à l'exception des personnes recrutées localement et rémunérées au taux horaire, conformément à la résolution 76 (1) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 7 décembre 1946 ;

h. « experts en mission » les personnes, autres que les fonctionnaires des Nations Unies, qui relèvent de l'article VI de la Convention ;

- i. « personnel du bureau de pays » les fonctionnaires des Nations Unies et les experts en mission affectés au bureau de pays ;
- j. « personnel local du bureau de pays » les personnes recrutées localement et rémunérées au taux horaire.

Article II. Objet et champ d'application de l'Accord

- 1. Le présent Accord a pour objet de réglementer le statut du bureau de pays et de son personnel et de faciliter sa coopération avec le Gouvernement.
- 2. Le présent Accord établit les dispositions nécessaires à l'exercice efficace des fonctions du bureau de pays et à la facilitation des activités de coopération avec le Gouvernement.

Article III. Application de la Convention

La Convention s'applique au bureau de pays, à son personnel, aux experts en mission, aux biens, aux fonds et aux avoirs.

Article IV. Objectifs, règles et normes générales pour le fonctionnement du bureau de pays

- 1. Conformément à la Charte des Nations Unies et au mandat défini dans la résolution 48/141 de l'Assemblée générale du 20 décembre 1993 et au présent Accord, le bureau de pays observe et rend compte de la situation des droits de l'homme afin de conseiller les autorités colombiennes sur les politiques, les programmes et les mesures à élaborer et à mettre en œuvre pour promouvoir et protéger les droits de l'homme en Colombie. Conformément aux paragraphes 6 et 7 de l'article IV du présent Accord, les activités du bureau de pays sont axées sur la coopération avec le Gouvernement afin de renforcer le respect et l'application du droit international des droits de l'homme et des autres normes du droit international pertinentes pour le mandat du bureau de pays et de promouvoir la mise en œuvre des recommandations faites à la Colombie par les organes et mécanismes chargés des droits de l'homme. Le bureau de pays conseille également les représentants de la société civile, les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme et les particuliers sur les questions relevant de sa compétence.
- 2. Les activités du bureau de pays sont guidées par les règles suivantes :
 - a. toutes les activités du bureau de pays visent à réaliser son mandat et à atteindre ses objectifs ;
 - b. le bureau de pays, sous réserve des dispositions du présent Accord, fonctionne comme un centre de gestion et de dialogue, favorisant un climat de confiance à l'égard de tous les secteurs impliqués et concernés par les questions relatives aux droits de l'homme, et entretient un dialogue régulier, des contacts et des relations de coordination avec le Gouvernement et les autres autorités de l'État ;
 - c. le bureau de pays agit avec discrétion et, dans ses relations avec tous les secteurs concernés par les questions relevant de sa compétence, il est guidé par les principes des Nations Unies, tels que l'impartialité, l'indépendance, l'objectivité et la transparence.

Article V. Fonctions du bureau de pays

- 1. Conformément à son mandat et sous l'autorité du Haut-Commissaire ou de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le bureau de pays :
 - a. observe, surveille et rend compte de la situation des droits de l'homme en Colombie afin de remplir les fonctions établies dans le présent Accord ;

b. assure la coopération, fournit des conseils et une assistance technique à l'ensemble des branches du gouvernement, y compris les organes de contrôles, concernant l'élaboration et la mise en œuvre de règles et de politiques relatives aux droits de l'homme, en tenant compte des recommandations formulées par les mécanismes internationaux des droits de l'homme pertinents ;

c. encourage l'échange de données d'expérience et de bonnes pratiques institutionnelles en matière de droits de l'homme, y compris la promotion de la coopération entre la Colombie et d'autres pays ;

d. informe les autorités compétentes des violations présumées des droits de l'homme et des autres normes du droit international qui relèvent du mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans les cas où, de l'avis du bureau de pays, les procédures juridiques internes suivies par les autorités nationales compétentes ne sont pas conformes aux instruments internationaux pertinents. Le bureau de pays peut recommander que des mesures préventives ou correctives soient adoptées lorsqu'il estime que les circonstances l'exigent. À cette fin, le bureau de pays reçoit toute information fournie, quelle qu'en soit la source, qu'elle soit individuelle, privée, publique ou officielle, sur les questions qu'il juge pertinentes. L'identité des sources d'information, des victimes et des témoins demeure confidentielle. Lorsque le bureau de pays estime que les circonstances l'exigent, il partage ces informations avec les autorités compétentes conformément aux règles, politiques et pratiques des Nations Unies.

Le bureau de pays peut également recommander et promouvoir des mesures visant à protéger les sources des informations qu'il reçoit ainsi que les victimes et les témoins des incidents signalés. Le bureau de pays fournit des conseils aux personnes qui communiquent des informations et les encourage à porter plainte auprès des autorités compétentes dans les meilleurs délais. En particulier, le bureau de pays s'abstient de publier des déclarations définitives identifiant des personnes ou des organisations spécifiques comme étant légalement responsables d'actes qu'elles sont présumées avoir commis ;

e. conseille et travaille avec les organisations de la société civile et leurs représentants, ainsi que les particuliers, pour renforcer leurs capacités à promouvoir et à protéger les droits de l'homme, notamment au moyen d'activités d'information et de vulgarisation concernant les mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme;

f. soutient les mesures prises par le Gouvernement pour renforcer les capacités institutionnelles en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, ainsi que les programmes de formation destinés aux responsables de l'application des lois, aux avocats et aux membres du pouvoir judiciaire ;

g. assure le suivi des recommandations et des décisions des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme afin de veiller à ce qu'elles soient dûment prises en considération par les autorités compétentes, et conseille ces dernières sur l'adoption de mesures spécifiques en vue de leur application ;

h. le bureau de pays est en communication constante avec toutes les entités gouvernementales compétentes — civiles et militaires — et l'État, ainsi qu'avec les organisations de la société civile qui se consacrent à la promotion et à la défense des droits de l'homme. Lorsqu'il prend des dispositions pour communiquer avec des personnes détenues, le bureau de pays agit en coordination avec les autorités compétentes ;

i. exerce les fonctions suivantes, qui sont explicitement prévues dans l'Accord final pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable, signé par le Gouvernement colombien et les FARC-EP le 24 novembre 2016, dont le Conseil de sécurité des Nations unies s'est félicité dans sa résolution 2307 (2016) :

i. prendre toutes les mesures nécessaires pour que les rapports annuels présentés par le Haut-Commissaire ou la Haute-Commissaire au Conseil des droits de l'homme comprennent un chapitre spécial sur la mise en œuvre des accords relatifs aux droits de l'homme (section 6.3.4 de l'Accord final);

ii. appuyer la mise en œuvre du point 5 de l'Accord concernant les droits des victimes (section 6.4.2 de l'Accord final) ;

iii. participer en tant qu'invité à la Commission nationale des garanties de sécurité, qui est chargée d'élaborer et de surveiller les mesures de lutte contre les organisations criminelles (section 3.4.3 de l'Accord final);

iv. appuyer la mise en œuvre des parties de l'Accord concernant les garanties de sécurité individuelles et collectives pour les membres des FARC-EP (section 6.4.2 de l'Accord final) ;

v. participer, en tant que membre permanent invité, au comité technique chargé d'élaborer et de coordonner un plan stratégique de sécurité et de protection du nouveau parti ou mouvement politique des FARC-EP (section 3.4.7.4.2 de l'Accord final) ;

vi. appuyer l'examen de la situation des membres ou des collaborateurs des FARC-EP détenus (section 6.4.2 de l'Accord final);

vii. collaborer à la vérification de l'application et du respect des sanctions imposées dans le cadre du nouveau mécanisme de justice pénale transitoire (paragraphes 60 et 62 de la section 5.1.2, en relation avec l'alinéa d) du paragraphe 53 de l'Accord final).

- 2. Le bureau de pays informe régulièrement le Gouvernement de ses préoccupations et de ses évaluations liées aux questions relevant de son mandat, en vue de favoriser un dialogue et de recevoir des commentaires à leur sujet. Le bureau de pays peut faire des déclarations publiques lorsqu'il le juge approprié sur toute question relevant de son mandat.
- 3. Le bureau de pays rend compte exclusivement au Haut-Commissaire ou à la Haute-Commissaire des activités menées dans le cadre de son mandat et de ses fonctions, des conditions qui ont facilité ou entravé lesdites activités, des engagements pris par le Gouvernement et des mesures concrètes qui ont été prises pour les mettre en œuvre, ainsi que des recommandations concernant les mesures à prendre.
- 4. Le Haut-Commissaire ou la Haute-Commissaire présente au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, conformément à son mandat et au présent Accord, des rapports publics analytiques détaillés sur la situation des droits de l'homme dans le pays, la mise en œuvre des accords relatifs aux droits de l'homme et les activités du bureau de pays. Le Haut-Commissaire ou la Haute-Commissaire formule également des observations et des recommandations qu'il ou elle juge appropriées en vue de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme en Colombie. Les informations recueillies par le bureau de pays sont mises à la disposition des divers organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l'homme auxquels la Colombie est partie et des autres mécanismes et programmes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, aux fins de l'exécution de leurs mandats respectifs.
- 5. Dans le strict respect de l'indépendance des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, le bureau de pays facilite, dans les limites de ses compétences, les visites que les rapporteurs spéciaux, les experts indépendants ou les groupes de travail effectuent en Colombie conformément à l'invitation permanente adressée par le Gouvernement à ces mécanismes.
- 6. Le bureau de pays et le Gouvernement établissent des plans et des mécanismes de travail et de coordination pour assurer, entre autres, le suivi des recommandations faites par le bureau de pays au Gouvernement colombien et l'inventaire des besoins des autorités nationales et régionales en matière de conseil, de coopération et d'assistance technique ou pour des questions stratégiques convenues d'un commun accord.
- 7. Le Gouvernement peut exprimer ses vues sur les rapports du Haut-Commissaire ou de la Haute-Commissaire visés au paragraphe précédent, en formulant les observations qu'il juge appropriées sur leur contenu, et peut

demander au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies de transmettre ses observations au Conseil des droits de l'homme, conformément à son règlement, sans préjudice du droit du Gouvernement de s'adresser directement au Conseil lorsqu'il le juge nécessaire.

8. Le Gouvernement s'efforce d'informer tous ses fonctionnaires du mandat du bureau de pays, ainsi que de ses déclarations et rapports, en vue de promouvoir la coopération des autorités et institutions de l'État et de contribuer efficacement à la pleine mise en œuvre dudit mandat.

Article VI. Personnalité juridique

- 1. Le siège du bureau de pays se situe dans la ville de Bogota, en République de Colombie, afin de remplir les fonctions énoncées dans le présent Accord. Le bureau de pays peut établir des sous-délégations en Colombie avec l'accord du Gouvernement.
- 2. Le bureau de pays est doté de la personnalité juridique sur le territoire de la République de Colombie, et dispose des pouvoirs nécessaires pour :
 - a. conclure des contrats;
 - b. acquérir et aliéner des propriétés mobilières et immobilières ;
 - c. engager une action en justice.
- 3. Aux fins du présent Accord, le bureau de pays est représenté par le directeur ou la directrice du bureau de pays.

Article VII. Statut et composition du bureau de pays

1. Le bureau de pays comprend des administrateurs recrutés sur le plan international et national, ainsi que du personnel local que le Haut-Commissaire ou la Haute-Commissaire nomme et juge nécessaire à la pleine exécution de son mandat. Il est dirigé par une personne dont les compétences dans le domaine sont reconnues et qui est désignée par le Haut-Commissaire ou la Haute-Commissaire en tant que représentant du bureau de pays, conformément aux règles, procédures et politiques du bureau de pays et de l'Organisation des Nations Unies. Le bureau de pays informe le Gouvernement de sa composition, en indiquant ses autres lieux d'implantation et le

nombre d'administrateurs et d'agents généraux. Avec l'accord du Gouvernement, le bureau de pays peut augmenter l'effectif total de son personnel recruté sur le plan international.

2. Le bureau de pays est ouvert au public.

Le bureau de pays et son personnel s'abstiennent de toute activité incompatible avec le caractère international et impartial de leurs fonctions ou contraire à l'esprit du présent Accord ou du droit colombien. Le directeur ou la directrice du bureau de pays prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces obligations. L'État hôte s'engage à respecter le statut exclusivement international du bureau de pays.

- 3. Le bureau de pays et autres locaux, leurs biens, fonds et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité, sauf dans la mesure où, dans un cas particulier, l'Organisation des Nations Unies y a expressément renoncée. La renonciation à l'immunité ne peut toutefois s'étendre aux mesures d'exécution.
 - a. tous les locaux utilisés par le bureau sont inviolables. Les avoirs et les biens du bureau de pays et ses locaux auxiliaires, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
 - b. les autorités compétentes locales ne peuvent pénétrer dans les locaux du bureau de pays sans le consentement exprès de son directeur et aux conditions agréées par lui.
- 4. Les archives du bureau de pays, et d'une manière générale, tous les documents appartenant au bureau de pays ou détenus par lui, sont inviolables, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur.
- 5. Le bureau de pays, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exonérés :
 - a. de tous impôts directs et taxes sur les ventes, conformément à l'article 8 de la Convention. Il est entendu, toutefois, que le bureau de pays ne saurait prétendre à l'exonération d'impôts qui constituent, de fait, des redevances afférentes à l'utilisation de services d'utilité publique.
 - b. des droits de douane ainsi que des interdictions et des restrictions d'importation et d'exportation à l'égard d'articles importés ou exportés pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés ne seront pas vendus sur le territoire de la Colombie, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par l'État hôte.

- c. des droits de douane ainsi que des interdictions et des restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.
- 6. Le bureau de pays bénéficie des facilités de communication prévues à l'article III de la Convention. En conséquence, aucune censure n'est appliquée aux courriers officiels et aux autres communications officielles du bureau de pays. Ladite immunité s'étend aux imprimés, aux données photographiques et électroniques et aux autres formes de communication. Le bureau de pays a le droit d'utiliser des codes et d'envoyer et de recevoir sa correspondance par courrier ou par valises scellées, qui sont tous inviolables et non soumis à la censure. Le personnel du bureau de pays a le droit de communiquer avec son siège à Genève et avec les membres de son personnel présents sur le terrain par radio, téléphone, télécopie, satellite ou par tout autre moyen de communication.

Article VIII. Statut des membres du personnel du bureau de pays

- 1. Le directeur ou la directrice du bureau de pays jouit dans le pays des privilèges et immunités prévus par la Convention.
- 2. Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies affectés au bureau de pays jouissent des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention.
- 3. Les experts en mission de l'Organisation des Nations Unies jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention.
- 4. Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l'intérêt des Nations Unies et nullement pour leur bénéfice personnel. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à tout fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite, et si cette immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation des Nations Unies. Le bureau de pays coopère avec les autorités colombiennes compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer le respect des règlements de police et de prévenir tout abus auquel pourraient donner lieu ces privilèges, immunités et facilités.

- 1. Le personnel et les fonctionnaires du bureau de pays, ainsi que ses biens, fournitures, équipements, pièces détachées ou moyens de transport ont le droit d'entrer en Colombie et d'en sortir sans retard ni entrave, conformément à la Convention.
- 2. Le personnel du bureau de pays jouit d'une entière liberté de circulation sur l'ensemble du territoire colombien. Le Gouvernement facilite la libre circulation dans les zones d'accès restreint, en coordination avec les autorités compétentes. La liberté de circulation comprend les prérogatives suivantes, à exercer dans le cadre du mandat du bureau de pays :
 - a. l'accès à l'ensemble des prisons, centres de détention et lieux d'interrogatoire. Le personnel du bureau de pays est autorisé à s'entretenir en privé avec toute personne détenue ou présente dans ces lieux, conformément aux alinéas a) et h) du paragraphe 1 de l'article V de l'Accord;
 - b. l'accès aux autorités centrales et locales dans toutes les branches du Gouvernement, y compris les services de police ;
 - c. les contacts directs avec des particuliers, des représentants d'organisations non gouvernementales, des institutions privées, des hôpitaux, des centres médicaux et des médias ;
 - d. l'accès à tous les documents officiels nécessaires au bon déroulement des activités du bureau de pays, à l'exception de ceux qui sont soumis au secret légal.

Article X. Drapeaux, emblèmes et signes distinctifs

Le bureau de pays peut arborer le drapeau ou les emblèmes des Nations Unies dans ses locaux, sur ses véhicules officiels et de toute autre façon convenue entre les Parties. Les véhicules du bureau de pays arborent l'emblème des Nations Unies ou un signe distinctif dont l'État hôte est informé.

Article XI. Identification

1. À la demande du directeur ou de la directrice du bureau de pays, l'État hôte délivre aux membres du personnel du bureau de pays les pièces d'identité appropriées certifiant qu'ils jouissent, en leur qualité de membres du personnel du bureau de pays, de privilèges et immunités, notamment en matière de liberté de circulation.

- 2. Les membres du personnel du bureau de pays doivent, sur demande, présenter, sans être tenus de s'en dessaisir, leurs pièces d'identité à tout fonctionnaire autorisé du Gouvernement.
- 3. Au moment du départ définitif ou de la réaffectation de tout membre de son personnel, le bureau de pays veille à ce que toutes les pièces d'identité soient renvoyées sans tarder à l'État hôte.

Article XII. Garanties de l'État hôte

- 1. L'État hôte assure au bureau de pays et à son personnel la sécurité nécessaire au bon déroulement de ses activités sur l'ensemble du territoire colombien. À cette fin, le bureau de pays notifie en temps utile à l'autorité gouvernementale désignée toute proposition d'organisation de voyage qui pourrait compromettre la sécurité de son personnel.
- 2. L'État hôte s'engage à respecter le statut du bureau de pays et de son personnel et veille à ce qu'aucune personne ayant eu des contacts avec le bureau de pays ne fasse l'objet d'abus, de menaces, de représailles ou de poursuites pour ces seuls motifs.
- 3. Chaque fois que le présent Accord fait référence aux privilèges, immunités et droits du bureau de pays et de son personnel, ainsi qu'aux facilités que l'État hôte s'engage à fournir, il incombe à l'État hôte de veiller à ce que les autorités locales compétentes respectent lesdits privilèges, immunités et droits et mettent à disposition les facilités en question.

Article XIII. Règlement des différends

Tout différend entre les Parties découlant du présent Accord ou de tout accord complémentaire ou s'y rapportant, autre que les différends visés à la section 30 de la Convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement mutuellement convenu, peut être soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Chaque Partie désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés en désignent un troisième qui assure la présidence du tribunal. Si l'une des Parties ne désigne pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande d'arbitrage, ou si les deux premiers arbitres ne désignent pas le troisième dans un délai de quinze jours à compter de leur désignation, l'une ou l'autre des Parties peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner un arbitre. Le tribunal établit les procédures d'arbitrage, à condition qu'il établisse que deux arbitres suffisent pour constituer un quorum sur toute question et que toutes les décisions nécessitent l'accord d'au moins deux

des arbitres. Les frais du tribunal sont pris en charge par les Parties selon l'appréciation du tribunal. La sentence arbitrale contient un exposé des motifs sur lequel elle est fondée et est définitive et lie les Parties.

Article XIV. Liaison avec le Gouvernement

Le Gouvernement désigne le Ministère des affaires étrangères comme entité de liaison pour la communication avec le bureau de pays sur toutes les questions liées aux activités dudit bureau, sans préjudice de la possibilité pour le bureau de pays de contacter directement les entités étatiques sur des questions spécifiques, conformément au paragraphe 1 de l'article V du présent Accord.

Article XV. Dispositions finales

- 1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. L'Accord peut être modifié par consentement mutuel au moyen d'un échange de notes écrites exprimant l'intention des Parties à cet effet.
- 2. Le présent Accord remplace dans son intégralité l'Accord signé le 30 octobre 2019, qui cesse d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
- 3. Le Gouvernement réaffirme que la lettre du 29 novembre 1996, signée en même temps que l'Accord signé le 29 novembre 1996, concernant la mise à disposition des locaux pour le siège du bureau de pays en Colombie, reste en vigueur.
- 4. À la lumière des considérations contenues dans son préambule et des fonctions du bureau de pays, le présent Accord reste en vigueur jusqu'au 4 avril 2032. Les Parties peuvent prolonger sa validité en échangeant des communications écrites exprimant leur souhait de le faire.
- 5. Tant que le présent Accord est en vigueur, chaque Partie peut le dénoncer par une communication écrite adressée à l'autre Partie. L'Accord reste en vigueur pendant une période de six mois à compter de la réception de la notification de dénonciation par l'une ou l'autre des Parties, afin de faciliter l'achèvement et la cessation des activités du bureau de pays en Colombie. Les obligations incombant au Gouvernement survivent à la dénonciation du présent Accord, dans la mesure nécessaire pour permettre le retrait ordonné des biens, des fonds et des avoirs du bureau de pays et le règlement de tout différend en cours en vertu de l'article XIII du présent Accord.

FAIT en double exemplaire en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Colombie :

Álvaro Leiva Durán

Ministre des affaires étrangères

Date: 28 janvier 2023

Lieu: Bogota

Pour l'Organisation des Nations Unies :

Volker Türk

Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme

Date: 25 janvier 2023

Lieu: Bogota